



NUE 152-A-2018 (AG)

contra Instituto Nacional de los Deportes (INDES)

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con doce minutos del diez de febrero de dos mil veinte.

1. Descripción del caso:

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por [REDACTED] en adelante el apelante, en contra de la resolución emitida por la oficial de información del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), el 31 de julio del año 2018, REF.RUAIP090-2018, donde la Federación Salvadoreña de Taekwondo (FESAT) denegó la información relativa a:

1) El acta de la reunión de la Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Taekwondo donde se conoció la solicitud del Colegio de Cintas Negras para ser afiliado como miembro, por primera vez;

2) El acta de la reunión de la Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Taekwondo donde se conoció la solicitud del Colegio de Árbitros para ser afiliado como miembro, por primera vez;

3) El acta de la reunión de la Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Taekwondo donde se aprobaron los requisitos para optar a la Certificación de Reconocimiento Nacional de Cinta Negra y KUKKIWON;

4) Detalle de ingreso percibido por la Federación Salvadoreña de Taekwondo derivado de los trámites y/o exámenes KUKKIWON desde el año 2008 hasta julio 2018;

5) Nombre de la partida presupuestaria en donde ingresan los fondos provenientes de los trámites y/o exámenes KUKKIWON;



6) Detalle del uso de los fondos percibidos derivados de los trámites y/o exámenes KUKKIWON desde el año 2008 hasta julio 2018; y,

7) El libro de registro de miembros de la Federación Salvadoreña de Taekwondo actualizado a fecha 9 de julio de 2018.

Por su parte, la **Federación Salvadoreña de Taekwondo** por medio de la oficial de información del **INDES** contestó:

Denegar la información enunciada en los numerales 1) al 6) y que en relación al numeral 7) se entregó información actualizada hasta el mes de abril del 2018, cuando el requerimiento es hasta el 9 de julio del 2018, razón por la que exterioriza su inconformidad y pide que se ordene la entrega de la misma.

El Instituto admitió la apelación y designó al comisionado **Hernán Alexander Gómez Rodríguez**, sin embargo tras la finalización de su período de funciones en el ejercicio del cargo, el caso fue asignado a la comisionada suplente en funciones **Daniella Huevo Santos**; pese a ello, en virtud del nombramiento del comisionado propuesto por el sector de asociaciones empresariales, el día 16 de mayo de 2019, el caso se reasignó al comisionado Propietario **Andrés Grégori Rodríguez**, para instruir el procedimiento y elaborar el proyecto de resolución.

El presidente de la junta directiva de la **FESAT** rindió el informe justificativo en los términos siguientes:

Respecto a los requerimientos 1) y 2) no existe documento donde conste la información solicitada porque no era requisito que la **FESAT conociera la solicitud de colegios para ser afiliados a la misma.**

En relación al requerimiento 3), esa actividad **no era regulada** por la **FESAT**, por lo tanto no era federada, hasta el 26 de enero de 2019 en sesión de Junta Directiva, que se acordó en el **punto número cinco la regulación del reconocimiento nacional de registros de grados superiores KUKKIWON**, además en lo relativo a los requerimientos 4), 5) y 6) se establecieron aranceles que deben cancelar los maestros examinadores en concepto de cuota

por registro anual para el maestro y del registro para grado superior sobre los aranceles; aclaró que se invierten en gastos de funcionamiento de la FESAT y actividades deportivas el resto ingresa a las demás cuentas corrientes de la FESAT información que no se le entregó por ser inexistente a la fecha que el apelante la solicitó.

Sobre el requerimiento 7) informó que la actualización del registro de miembros se realiza anualmente y previa a una asamblea general ordinaria o extraordinaria, ya que es la ocasión oportuna para hacerlo y es requerido por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

Durante la audiencia oral, no compareció el apelante [REDACTED], tampoco su apoderado [REDACTED], pese haber sido notificados en debida forma, tal como consta en el expediente de este procedimiento de apelación; asimismo compareció [REDACTED], en su calidad de apoderada general judicial y administrativa de la FESAT, donde en lo medular ratificó la postura con lo resuelto en primera instancia, además expresó que no se está negando el acceso a la información, argumentando que la información requerida no había sido generada o los hechos que la generaban no eran regulados al momento de la solicitud de acceso a la información.

2. Análisis del caso

El análisis jurídico del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) Dirimir la controversia acerca del incidente de nulidad; (II) El principio de máxima publicidad y sus efectos; (III) Comentarios sobre la naturaleza de la información requerida, la vinculación de las entidades privadas que manejan recursos o información pública aplicable a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP); y, (IV) aplicación de los preceptos anteriores al caso en concreto.

I. 1. El 25 de septiembre de 2019, [REDACTED] apoderado general judicial del apelante, interpuso incidente de *nulidad insubsanable* en contra de la realización de la audiencia oral a las once horas del día once de septiembre de este año, donde expuso los siguientes argumentos:



Conforme al Art. 232 letra "c" Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), aplicable al presente caso en virtud de la regla estipulada en el Art. 20 CPCM, alegan la nulidad insubsanable de la audiencia de apelación realizada en esta ciudad, a las once horas del día once de septiembre de 2019, debido a que señalan que se han vulnerado derechos fundamentales y estos son *indisponibles e irrenunciables* puesto que este tipo de nulidades no se pueden convalidar, por tanto conforme el Art. 235 inciso primero CPCM, estas nulidades se pueden alegar en cualquier etapa del proceso.

En ese contexto, el apelante manifestó que este Instituto, en el incidente de apelación que promovió su mandante, se convocó a la audiencia oral que, para las once horas del día 11 de septiembre del año 2019, según resolución de las catorce horas y doce minutos del día 26 de agosto del corriente año, resolución en la que se consigna la necesaria presencia de las partes interesadas, hasta ese momento, el apelante actuaba en su carácter personal.

Por ello, cuando se notificó dicha resolución, así como para la fecha en que se señala para la realización de la referida audiencia, y hasta la fecha de la interposición de este incidente, el apelante se encontraba fuera del país, motivo por el cual, representa un obstáculo material para asistir personalmente a cualquier diligencia del tipo para la cual se le convocó.

En tal sentido, por medio del [REDACTED], presentó escrito con fecha 10 de septiembre de 2019, informando que el apelante, se encontraba fuera del país por lo que, se le imposibilitaba asistir a la referida audiencia, adjuntando al mencionado escrito, copia certificada por notario de testimonio de escritura de poder general judicial otorgado por el apelante a favor del mencionado profesional, advirtiendo en el escrito, que el licenciado [REDACTED] se limitó a informar de la ausencia del país del apelante y a que se reprogramare la audiencia, y en ningún momento se advierte, han manifestado en dicho escrito, solicitud de tenerle por parte en dicho proceso administrativo como apoderado de la parte material solicitante e intervenir en el trámite administrativo.

No obstante ello, y a pesar del principio de congruencia procesal, esa entidad resolvió por medio de resolución de las ocho horas y quince minutos del día once de septiembre de 2019, tenerlo por parte y realizar la audiencia tal como había sido programada, en vista que la parte material interesada contaba con un apoderado con la calidad para intervenir en su

representación y por ende, se llevó a cabo la diligencia cuya celebración se ordenó y programó, habiéndose realizado la misma sin la asistencia del apoderado, quien además refirió que se encontraba incapacitado por prescripción médica y en su oportunidad se agregó la documentación al informativo administrativo.

También advierten, que en el expediente con referencia NUE 227-A-2017 (MM), por medio de resolución de las trece horas con cuarenta minutos del día veinte de diciembre de dos mil diecisiete, ese Instituto accedió a la reprogramación de una audiencia, a solicitud presentada por el Presidente de la Federación de Taekwondo, [REDACTED] de fecha 19 de diciembre de 2017, manifestando que su cargo en la mencionada federación de carácter voluntario y no pudiendo tramitar el permiso en su trabajo no podría asistir, el Instituto accedió a la petición y reprogramó la audiencia, sin que a la solicitud referida se le acompañara mayor justificación, nada más el dicho del peticionario en aquel caso; no cabe duda, que el Instituto ha faltado al *stare decisis*, ha faltado a sus propios precedentes y no ha tratado con base al *principio de igualdad* a mi mandante, pues encontrándose en las mismas circunstancias que en aquél caso del expediente NUE 227-A-2017 (MM) se encontró el peticionario, no se accedió a la solicitud de reprogramación para garantizarle el ejercicio del *derecho de defensa* a mi patrocinado y se llevó a cabo la audiencia en evidente infracción a derechos fundamentales del apelante.

Q-
Q-C
pe-

En este sentido, el apelante a través de su apoderado, realizó una serie de consideraciones del principio de congruencia y su incidencia en el derecho de defensa y audiencia de las partes en los procedimientos.

Por ello, que sostiene que, ante la petición del abogado [REDACTED] de informar de la ausencia de [REDACTED] la autoridad administrativa con base al principio de congruencia debió resolver teniéndose por informada de tal ausencia, y en todo caso fijar un plazo razonable y prevenirle a la parte material que se presentare personalmente o constituir un mandatario con expresas instrucciones para intervenir en el caso *sub lite*, a ello debió ajustarse la resolución conforme a la petición. (Sic).

La segunda cuestión a analizar, sostienen que es la realización de la audiencia de apelación con ausencia total de la parte interesada y solicitante; es decir, en ausencia del



Ruano Argueta; y es que en reiterada jurisprudencia lo ha establecido, el *derecho de audiencia* es un derecho de contenido procesal.

Por lo que, advierte que al haberse efectuado la audiencia de apelación en ausencia del impetrante, [REDACTED], pese a tener justo impedimento, se ordenó su realización, vulnerándosele los derechos de audiencia y de defensa del ciudadano [REDACTED] (Sic).

Finalmente advierte que, en el presente caso, entre otros, se ha vulnerado los derechos y garantías de *audiencia* y el de *defensa*, por los motivos anteriores, por lo que la audiencia realizada a partir de las once horas del día once de septiembre de 2019, es nula absolutamente por haberse infringido los derechos de audiencia y el defensa de su mandante, [REDACTED] y por tanto, de conformidad a lo preceptuado en el Art. 232 letra "e" del CPCM es procedente declarar su Nulidad y ordenar su reposición. (Sic).

2. Admitido el incidente de nulidad se corrió traslado a la Federación Salvadoreña de Taekwondo, a efecto de conocer su posición frente a lo planteado, remitiendo a este Instituto escrito el 25 de octubre de este año, por medio de su apoderada [REDACTED] donde expresó lo siguiente:

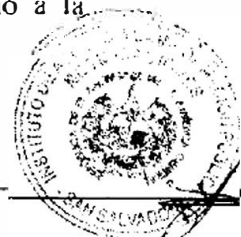
a) Del análisis de la redacción del precitado escrito presentado por el profesional [REDACTED] se tiene que en el escrito de interposición del incidente de nulidad se aduce por el licenciado [REDACTED] que [REDACTED] no se postula solicitando se le tenga como parte en el presente proceso. pues solo estaba informando de la ausencia de su mandante y que no solicitó intervención como parte en el presente proceso administrativo, de lo cual se puede verificar del relacionado escrito, en el cual el licenciado [REDACTED] postula como apoderado especial administrativo del señor [REDACTED], y que además acreditaba tal calidad anexando la copia certificada del poder especial administrativo, de lo cual se colige que el mismo suscriptor del escrito se postula tácitamente como apoderado del señor [REDACTED], y a partir de ahí es que se le reconoce como parte en este proceso. Siendo que la resolución de las ocho horas con quince minutos del once de septiembre del presente año fue apegada a derecho, ya que el defecto de que la parte material, no contaba con representante en este proceso, se suplió con el escrito

del Licenciado [REDACTED]. Además de ello se tiene que el relacionado profesional tampoco compareció a la celebración de la audiencia del once de septiembre de dos mil diecinueve, ya que presentó escrito por medio del cual se expresó que se encontraba mal de salud, pero no se documentaba por ningún medio de prueba tal situación, sino que fue hasta las quince horas con dieciséis minutos del día once de septiembre del 2019, que se presentó escrito junto con una constancia médica, de un médico particular, que relacionaba cierta condición de salud del profesional. (Sic).

b) También menciona que, el supuesto del caso NUE 227-A-2017, no aplica al presente caso, ya que el señor [REDACTED] solicitó justificación a título personal en calidad de presidente de la Federación de Taekwondo, como parte material, en donde no estaba siendo representado por ningún apoderado, mientras que en este caso, la solicitud de reprogramación no era suscrita por el señor [REDACTED] ya que como se ha relacionado se acreditó como apoderado de este el licenciado [REDACTED] quien perfectamente podía haber comparecido como parte técnica. (Sic).

Ya que se acreditó con la documentación respectiva y cumplía con ello lo preceptuado en los artículos 67 y 68 del CPCM siendo que la primera de las disposiciones citadas establece que en los procesos civiles y mercantiles será preceptiva la comparecencia por medio de procurador, nombramiento que habrá de recaer en un abogado de la República, sin cuyo concurso no se le dará trámite al proceso. (Sic).

c) Por otro lado, el licenciado [REDACTED], en aplicación al Art. 68 del CPCM, acreditó su facultad de apoderado por medio del poder que presentó en copia certificada por notario, y conforme a ello el citado artículo regula: "El poder para litigar se deberá otorgar por escritura pública" por lo cual según lo establece el Art. 69 del CPCM el licenciado [REDACTED] no estaba limitado para poder realizar actuaciones y representación de su mandante ya que según esta última disposición citada el poder se entenderá general y abarcará todo el proceso, con sus instancias y recursos, desde los actos preliminares hasta la ejecución; y facultará al procurador para realizar válidamente, en nombre de su poderdante todos los actos procesales comprendidos, en la tramitación de los procesos. Con ello se hace ver que no se ha violentado el principio de defensa del señor [REDACTED], pues contaba con un apoderado debidamente nombrado y acreditado, sin embargo, este no compareció a la



realización de la audiencia de prueba del once de septiembre del año dos mil diecinueve. (Sic).

Asimismo, sostiene que la parte apelante, no justificó su incomparecencia en algunos de los supuestos del Art. 208 del CPCM, por lo que, es factible proceder según lo dispone el artículo 405 del CPCM, el cual establece que las partes deberán comparecer a la audiencia. Cuando dejen de concurrir ambas partes, el juez pondrá fin al proceso sin más trámite. Si asistiere una sola de ellas, se procederá a la celebración de ella; y si se hubiere propuesto su declaración, se tendrán por ciertos los hechos a que se refiriera el interrogatorio.

Finalmente, la apoderada de la FESAT manifestó que se tenga por contestado el recurso de nulidad absoluta interpuesto por el apoderado del señor [REDACTED], en sentido negativo por considerar esta representación que cada una de las actuaciones realizadas por este Instituto, no se acredita la existencia de las causales enunciadas en el relacionado incidente de nulidad interpuesto. (Sic).

3. El objeto de controversia sobre este punto versa sobre: a) una supuesta vulneración al principio de congruencia; y, b) una supuesta vulneración al derecho constitucional de audiencia y defensa; alegados por el apoderado del denunciante, que fueron controvertidos por la apoderada de la FESAT, habiendo conocido los motivos de impugnación para el presente incidente de nulidad este Instituto realiza las siguientes consideraciones:

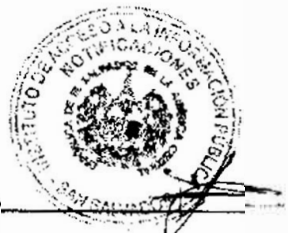
a) Respecto a lo vertido por las partes, relacionado al principio de congruencia, este Instituto es enfático en afirmar que los precedentes que se emiten, no siempre son adaptables a otros casos, pues concurren diferencias fácticas que hacen imposible su aplicación. En el presente caso, se notificó al apelante [REDACTED] sobre la realización de la audiencia oral para el 11 de septiembre de 2019, desde el 28 de agosto, es decir que tuvo *trece días* para remitir un escrito en su calidad personal, afirmando su impedimento para comparecer por encontrarse fuera del país; sin embargo, es hasta las quince horas con cuarenta y cuatro minutos del 10 de septiembre, un día antes de la realización de la audiencia que el profesional [REDACTED] acreditándose en debida forma como apoderado especial administrativo del apelante, informa sobre el impedimento de comparecer a la audiencia por parte de su mandante, es evidente que tácitamente se mostró parte en nombre y representación de su

mandante, ya que así lo estipula la certificación del poder especial y administrativo que adjuntó con el escrito presentado.

Asimismo, es pertinente señalar que cualquier persona natural o jurídica para intervenir en los procedimientos administrativos que se tramitan en este Instituto, debe estar legitimada para ello, conforme al Art. 65 y 66 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA); en ese sentido, es pertinente señalar que no existe la divisibilidad de la representación; es decir, entender que se es representante para algunas actuaciones y para otras no, pues cuando el licenciado [REDACTED], informó de la supuesta incapacidad de su mandante para comparecer en audiencia, lo hizo en su calidad de apoderado; pues entenderlo de otra forma, sería en el sentido de no reconocer su acreditación.

También, al haberle notificado de la no suspensión de la audiencia oral, el licenciado [REDACTED] alegó impedimento de salud para no comparecer a la audiencia sin adjuntar en ese momento la constancia médica pertinente, efectuando materialmente actos de representación del apelante, dejando de asumir su deber de comparecer a la audiencia en nombre de su mandante. Por lo que, el supuesto que se dio en el procedimiento de apelación NUE 227-A-2017, fue en circunstancias diferentes a las alegadas. En ese sentido, no existe vulneración al principio de congruencia; pues para resolver lo solicitado, se debía acreditar la personería con la que actuaba el licenciado [REDACTED]

b) Referente a la vulneración al derecho de audiencia y de defensa, ha quedado debidamente establecido que se han respetado estas garantías constitucionales al apelante [REDACTED] pues dentro del procedimiento ha quedado acreditado que se encontraba representado por su apoderado y que por una causa que escapa al actuar de este Instituto, no compareció a la audiencia oral, aduciendo causas que no fueron probadas en el momento procesal oportuno; sino con posterioridad, ante ello este Instituto aplicó lo dispuesto en el Art. 208 del CPCM, donde lo afirmado por el profesional [REDACTED] no se adecuaba a ninguna causal para acreditar su impedimento para comparecer a la audiencia, en ese supuesto, no fue por causa atribuible al Instituto que el apelante no tuviera representación en la audiencia oral, sino por el mismo accionar de su mismo apoderado.



Por las razones antes expuestas, este Instituto resuelve desestimar en todas sus partes el incidente de nulidad planteado por [REDACTED] apoderado del apelante [REDACTED], por no existir vulneraciones al principio de congruencia, derecho de audiencia y derecho de defensa.

II. Una vez analizado lo anterior, es pertinente señalar que el principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir información contenido en el artículo 13 de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han establecido que el derecho de acceso a la información debe estar regido por el “principio de máxima divulgación”¹. Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de excepciones².

El Art. 4 letra “a” de la LAIP establece el principio de máxima publicidad como rector del acceso a la información pública, el cual demanda que la información en poder de los entes obligados es pública y accesible y sometida a un régimen limitado de excepciones. En ese orden de ideas, para garantizar dicho principio y el de disponibilidad, la LAIP configuró un procedimiento sencillo y expedito que facilite el acceso de la información pública a toda persona.

Asimismo, la Corte IDH, se ha manifestado sobre el principio de máxima publicidad, en el sentido que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales

¹ Corte I.D.H., *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*, Sentencia de 19 de septiembre de 2006, Serie C No. 151, párr. 93; Corte I.D.H., *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil*, Sentencia de 24 de noviembre de 2010, Serie C No. 219, Párr. 230.

² CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08), *Principios sobre el derecho de acceso a la información*, 7 de agosto de 2008. Punto resolutive 7. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_147_LXXIII-O-08.p

se rijan por el principio de máxima divulgación, de manera que toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”³.

También, se puede interpretar que los tres efectos del principio de máxima publicidad frente a la información que produzca, administra o se encuentra en poder de los entes obligados⁴, son que: a) el derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción⁵; b) la carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al órgano que fue solicitada⁶; y, c) preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación⁷.

III. Una vez establecido lo anterior, es pertinente señalar por qué la FESAT es un ente obligado a la LAIP.

El Art. 7 Inc. 2° de la LAIP, bajo el epígrafe “Entes obligados” establece lo siguiente: *“También están obligadas por esta ley las sociedades de economía mixta y las personas naturales o jurídicas que manejen recursos o información pública o ejecuten actos de la función estatal, nacional o local tales como las contrataciones públicas, concesiones de obras o servicios públicos. El ámbito de la obligación de estos entes se limita a permitir el acceso a la información concerniente a la administración de los fondos o información pública otorgados y a la función pública conferida, en su caso”* (las negritas son nuestras).

Del análisis de dicha disposición, se advirtió en la resolución de las trece horas con cuarenta minutos del 21 de marzo de dos mil 2018, en el recurso de apelación de referencia NUE 177-ADP-2017, que la LAIP incorpora tres supuestos para determinar si una persona natural o jurídica se encuentra obligada a su cumplimiento, éstos son los siguientes: 1) que reciba recursos públicos; 2) que administre recursos o bienes del Estado; y, 3) que sea una institución que ejecute actos de la administración en general.

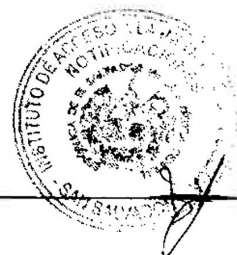
230. ³ CIDH- Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C, N° 219, párrafo

⁴ El Art. 7 de la LAIP, contiene quienes son los entes obligados a la mencionada ley.

⁵ Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico interamericano. segunda edición. 2012.

⁶ Ídem

⁷ Ídem



En ese sentido, es preciso manifestar que, la FESAT está obligada a la LAIP, por dos razones, la primera es por que recibe fondos públicos y la segunda por que ejecuta actos de la administración, al garantizar el goce de la cultura a través de la promoción y práctica de la disciplina del Taekwondo, ya que lo anterior es una obligación del Estado conforme al Art. 2 inc. 2º de la Constitución de la República.

1. Bajo esa premisa, es pertinente determinar de manera prolija dicha naturaleza, la obligación al cumplimiento de la LAIP y de entrega de la información; pues para ello, es preciso realizar las siguientes consideraciones:

Como se mencionó la **Constitución de la República de El Salvador**, establece en su Art. 2 Inc. 2º: “es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la (...) cultura ...”.

Sobre la anterior disposición constitucional, se sustentan los principios de la **Ley General de los Deportes de El Salvador (LGDES)**, en la que se establece en su Art. 2, letra “C” que la cultura a efectos de la ley es: El deporte y las actividades físicas como manifestación cultural y actividades de interés general cumplen una función social”. Por ello, al inicio del citado artículo menciona: “La administración pública garantizará a la población el acceso al deporte y la actividad física ...”

Aunado a lo anterior, el Art. 3 de la **LGDES**, declara de interés social y de utilidad pública la organización, promoción y desarrollo del deporte en todo el territorio nacional, donde el Órgano Ejecutivo está obligado a garantizar a los habitantes de la República el derecho fundamental de acceder al deporte, la actividad física y a la enseñanza de la educación física. Para hacer efectivo el goce de tales derechos, el deporte y la educación física serán objeto de atención, estímulo y apoyo de parte del Estado.

Siendo una obligación del Estado la práctica, promoción y masificación del deporte, en el Art. 6 de la mencionada ley, crea el **Instituto Nacional de los Deportes (INDES)**, como el ente rector de los deportes en El Salvador que según el Art. 8 de la misma Ley, le confiere competencias, entre la gama establecidas, destacan:

a) Elaborar, establecer, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional de los deportes y de la actividad física, determinando las medidas necesarias para fomentar su masificación.

d) Proporcionar asistencia técnica y económica a entidades deportivas públicas y privadas que se dediquen a la promoción y práctica del deporte.

Continúa el Art. 9 de la **LGDES**, que “la dirección del **INDES** será ejercida por un Comité Directivo, que será el encargado de elaborar, aprobar e implementar la política deportiva nacional y dirigir la administración del **INDES**”.

En misma línea, el Art. 14 de la Ley señala las atribuciones del Comité Directivo del **INDES** entre las cuales están:

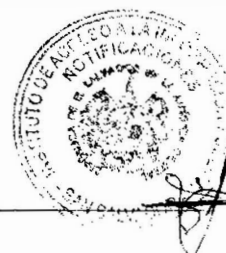
k) Aprobar la asignación económica anual para cada Federación Deportiva Nacional y otras organizaciones deportivas.

Al respecto, sobre las Federaciones Deportivas el Art. 27 de la Ley menciona: “Para efectos de esta Ley, son Federaciones deportivas aquellas integradas por Asociaciones Deportivas, Clubes Deportivos, Ligas Deportivas, Equipos, Entrenadores, Árbitros o Atletas.

Las federaciones son entidades de utilidad pública, con personalidad jurídica y sin fines de lucro. Dichas Federaciones se registrarán por esta Ley”

Sobre el reconocimiento de las Federaciones Deportivas Nacionales el Art. 28 de la Ley estipula “Las Federaciones Deportivas Nacionales son la máxima autoridad en su deporte y sólo podrá ser reconocida por el **INDES** una por cada deporte, de acuerdo con el reconocimiento de su respectiva Federación Internacional”.

Para este caso concreto, la Federación Salvadoreña de Taekwondo, es la federación adscrita al **INDES** y por ende reconocida por el mismo, para promover el taekwondo en sus diferentes ramas, encargada de llevar registro de los clubes, sus miembros y atletas que los conforman, los resultados de las competencias oficiales que realiza dicha federación, las actas de su Junta Directiva, planes de trabajo presentados al **INDES** y sus reglamentos internos.



2. Este Instituto ya se ha pronunciado en el sentido que las federaciones deportivas son entidades privadas sujetas a la competencia de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro, que otorga autonomía a este tipo de organismos para crearse y configurarse de acuerdo a la voluntad de sus asociados, sin más requisitos de lo que la misma ley establece.⁸

Por su parte, el Art. 2 de la LAIP establece el derecho que toda persona tiene a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y “demás entes obligados” de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna. El Art. 7 de la LAIP establece que, al margen de las instituciones del Estado, también están obligados al cumplimiento de la Ley **“cualquier otra entidad u organismo que administre recursos públicos”** y en particular, “las personas naturales o jurídicas que manejen recursos o información pública”; y que “el ámbito de su obligación se limita a permitir el acceso a la información concerniente a la administración de los fondos o información pública otorgados”.

En este procedimiento quedó demostrado que el **INDES** destina recursos públicos a la **Federación Salvadoreña de Taekwondo (FESAT)**, hecho que convierte a esta, en un sujeto obligado a la LAIP y, por ende, tiene el deber de rendir cuentas respecto a la administración y ejecución de dichos fondos, o información pública que maneja. Asimismo, tiene una responsabilidad que un principio tiene el Estado la obligación de promover y garantizar a la ciudadanía. Así, en cumplimiento del Art. 67 de la LAIP, las solicitudes de información relacionadas con las personas privadas obligadas por la ley, se tramitan ante el oficial de información del ente público al que corresponda su vigilancia o con el que se vinculen, tal como ocurrió en este caso.

IV. En este apartado se analizará la procedencia para entregar la información solicitada por el ciudadano apelante:

⁸ Resolución Definitiva Ref. NUE 70-A-2018 (RC), del 17-VIII-2018. Pronunciada por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Pág. 4.

1) *El acta de la reunión de la Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Taekwondo donde se conoció la solicitud del Colegio de Cintas Negras para ser afiliado como miembro, por primera vez;*

2) *El acta de la reunión de la Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Taekwondo donde se conoció la solicitud del Colegio de Árbitros para ser afiliado como miembro, por primera vez;*

3) *El acta de la reunión de la Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Taekwondo donde se aprobaron los requisitos para optar a la Certificación de Reconocimiento Nacional de Cinta Negra y KUKKIWON;*

Respecto a los dos requerimientos de información, este Instituto considera, que pese a lo afirmado por la FESAT que esa información no obra en sus archivos, no es argumento suficiente, que demuestre dicha afirmación; pues este Instituto considera que aunque no era un requisito para adherirse a la federación al momento de su constitución, eso no significa que tampoco no se haya generado algún tipo de información relacionado con ello, pues debe existir algún documento de aceptación o al menos algún escrito del Colegio de Cintas Negras y Árbitros donde se plasmara su intención de formar parte de la Federación Salvadoreña de Taekwondo.

Asimismo, en lo relacionado al tercer requerimiento, pese a que la FESAT argumenta que los requisitos para optar al certificado de reconocimiento nacional de Cinta Negra y KUKKIWON, fueron regulados a partir del veintiséis de enero de 2019, tal como consta en la prueba aportada; sin embargo, a criterio de este Instituto no es un argumento suficiente, ya que antes de esa fecha ya se realizaban dichas certificaciones, de lo contrario no fuera un hecho de controversia en este procedimiento al ser solicitado por el apelante en el procedimiento de acceso a la información. En ese sentido, debe existir algún tipo de normativa o práctica interna que avalaban este tipo de certificaciones, antes de que fueran regulados en el año 2019.

Es atinente señalar que la inexistencia implica necesariamente que la información **no se encuentra en los archivos de la autoridad**; —es decir, se trata de una cuestión de



hecho-; no obstante, que la dependencia o autoridad cuente con las facultades para poseer dicha información. En este sentido, es de señalar que la inexistencia es un concepto que se atribuye a la información solicitada.⁹

Además, en resoluciones emitidas por este Instituto¹⁰, se han tomado como base los **criterios emitidos por la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA)**, y en relación a la inexistencia de la información ha establecido que: “se deberá fundar y motivar que la información solicitada no existe, y para ellos, se tiene que acreditar que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos materiales y en su caso, digitales consignando los requisitos que den certeza de que la búsqueda fue realizada de manera minuciosa, tales como: i) que se hizo llegar la solicitud de acceso a todas las áreas competentes que pudieran contar con la información requerida, con el propósito de que, en su caso la localizaran y manifestaran si se encontraba disponible; ii) que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que estas fueron las adecuadas para atender el caso concreto; iii) que el criterio de búsqueda utilizado fue el adecuado: amplio y extensivo (es decir, no restrictivo); iv) que de la búsqueda efectuada no se localizaron documentos o información que den cuenta de lo solicitado; y, v) la precisión, en su caso de que se procedió a la destrucción de la información por cuestiones de la vida útil, en los términos de la ley de que se trate. Cuando posterior al análisis de la inexistencia de la información, se determine que la misma debería de existir en virtud de que deriva del ejercicio de facultades, competencias o atribuciones de la autoridad (ente obligado) ésta deberá generarse o reponerse en los casos que sea posible”.

Por ello, la inexistencia de la información decretada por los entes obligados, **no deber ser utilizada como un límite al DAIP** de los solicitantes de la información pues deben probar que han realizado las diligencias necesarias para su obtención o reconstrucción y futura entrega de la información.

⁹ Criterio /00015-09, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de México.

¹⁰ Instituto de Acceso a la Información Pública, Resolución Definitiva, Referencia: NUE 143-A-2017, (El Salvador, 2017).

Por ende, este Instituto considera que la FESAT debe realizar una nueva búsqueda exhaustiva de la información o información relacionada a la misma, bajo el análisis antes realizado, siendo pertinente revocar la resolución de la oficial de información del INDES y ordenar al ente obligado (FESAT) realizar las siguientes acciones:

Realizar una nueva búsqueda de: "1) El acta de la reunión de la Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Taekwondo donde se conoció la solicitud del Colegio de Cintas Negras para ser afiliado como miembro, por primera vez; 2) El acta de la reunión de la Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Taekwondo donde se conoció la solicitud del Colegio de Árbitros para ser afiliado como miembro, por primera vez; y, 3) El acta de la reunión de la Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Taekwondo donde se aprobaron los requisitos para optar a la Certificación de Reconocimiento Nacional de Cinta Negra y KUKKIWON;", que no se limite a un solo registro, sino a otros archivos que objetivamente pueden resguardar dicha documentación.

Dichas diligencias deberán realizarse y dejar constancia por medio de su presidente. En el caso de no encontrarse la información en controversia, se deberá declarar su inexistencia, relacionando todos los medios probatorios y los hechos que surjan en dicha diligencia.

Es preciso manifestar, que conforme a los hechos que surjan en las diligencias ordenadas, la Unidad de Cumplimiento determinará la pertinencia de notificar a otras entidades Estatales, para que determinen cualquier tipo de responsabilidad por parte del personal encargado de resguardar dicha documentación.

Por otro lado, respecto a los siguientes puntos:

4) Detalle de ingreso percibido por la Federación Salvadoreña de Taekwondo derivado de los trámites y/o exámenes KUKKIWON desde el año 2008 hasta julio 2018;

5) Nombre de la partida presupuestaria en donde ingresan los fondos provenientes de los trámites y/o exámenes KUKKIWON;



6) Detalle del uso de los fondos percibidos derivados de los trámites y/o exámenes KUKKIWON desde el año 2008 hasta julio 2018;

Este Instituto advierte que, según lo manifestado por la apoderada de la FESAT, esa información a la fecha de la solicitud, no existía; sin embargo, es importante establecer que no toda la información que poseen instituciones de la naturaleza de la FESAT es pública, pues la premisa que se debe atender es sobre el manejo de los fondos públicos, su utilización y provecho para los fines de la promoción y práctica del deporte y lo ligado estrechamente al mismo. Así como las actividades atinentes estrechamente a esa finalidad.

En ese sentido, este Instituto considera que el ingreso percibido de esos fondos, la partida presupuestaria de los mismos y el uso que se le da, no son de naturaleza pública, sino de naturaleza privada que es de interés meramente institucional, y no pública.

Lo anterior, en vista que ese dinero proviene directamente de las personas interesadas en realizar el trámite para certificarse en el grado KUKKIWON, es decir fondos privados de cada persona, en este supuesto es claro que no existe intervención de transferencia de fondos públicos por parte del INDES, por lo tanto este Instituto está imposibilitado de conocer el detalle de ese dinero percibido por la FESAT, a través de los trámites de certificación de grado KUKKIWON, porque están fuera de obligaciones y parámetros establecidos en la LAIP, al ser actos ejecutados por personas particulares que pactan un precio entre ellas mismas, para la realización de pruebas que acreditan haber alcanzado el grado de KUKKIWON en el deporte de Taekwondo.

7) El libro de registro de miembros de la Federación Salvadoreña de Taekwondo actualizado a fecha 9 de julio de 2018.

Sobre este último punto, este Instituto considera que la FESAT al ser un ente obligado a la LAIP por percibir fondos públicos del INDES, por promocionar el Taekwondo a través de sus escuelas a nivel nacional, sí deben proporcionar su registro de miembros, ya que se trata de información de naturaleza pública, dado que es generada gracias a los fondos de los contribuyentes; es decir, recursos públicos.

En ese sentido, se cumple con la definición de información pública (Art. 6 letra “c” de la LAIP), que comprende también aquella en poder de las personas jurídicas privadas que reciben participación o subvención del Estado, que tienen a su cargo la prestación de un servicio público esencial y que documentan el ejercicio de sus facultades o actividades; por lo tanto, es procedente ordenar la entrega de la información de este registro actualizado hasta la fecha 9 de julio del 2018, tal como fue requerido por el apelante Ruano Argueta.

Decisión del caso

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con base a los Artículos 94, 96 letra “d” y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve**:

a) **Modificar** la resolución REF.RUAIP090-2018 emitida por la oficial de información del **Instituto Nacional de los Deportes (INDES)**, el 31 de julio del año 2018, acerca de los requerimientos de información realizados a la **Federación Salvadoreña de Taekwondo (FESAT)**.

b) **Confirmar** la resolución REF.RUAIP090-2018 emitida por la oficial de información del **Instituto Nacional de los Deportes (INDES)**, el 31 de julio del año 2018, donde la **Federación Salvadoreña de Taekwondo (FESAT)** hizo saber al apelante que la información relacionada a: *4) Detalle de ingreso percibido por la Federación Salvadoreña de Taekwondo derivado de los trámites y/o exámenes KUKKIWON desde el año 2008 hasta julio 2018; 5) Nombre de la partida presupuestaria en donde ingresan los fondos provenientes de los trámites y/o exámenes KUKKIWON; y, 6) Detalle del uso de los fondos percibidos derivados de los trámites y/o exámenes KUKKIWON desde el año 2008 hasta julio 2018;* no versa sobre fondos públicos percibidos por esa federación sino de los fondos privados de cada persona interesada en certificarse en el grado KUKKIWON.

c) **Revocar** la resolución REF.RUAIP090-2018 emitida por la oficial de información del **Instituto Nacional de los Deportes (INDES)**, el 31 de julio del año 2018, donde la **Federación Salvadoreña de Taekwondo (FESAT)** denegó la información consistente en: *1) El acta de la reunión de la Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Taekwondo donde se conoció la solicitud del Colegio de Cintas Negras para ser afiliado como miembro.*



por primera vez; 2) El acta de la reunión de la Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Taekwondo donde se conoció la solicitud del Colegio de Árbitros para ser afiliado como miembro, por primera vez; 3) El acta de la reunión de la Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Taekwondo donde se aprobaron los requisitos para optar a la Certificación de Reconocimiento Nacional de Cinta Negra y KUKKIWON; y, 7) El libro de registro de miembros de la Federación Salvadoreña de Taekwondo actualizado a fecha 9 de julio de 2018.

c) Ordenar al Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y a la Federación Salvadoreña de Taekwondo a realizar una nueva búsqueda de: 1) El acta de la reunión de la Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Taekwondo donde se conoció la solicitud del Colegio de Cintas Negras para ser afiliado como miembro, por primera vez; 2) El acta de la reunión de la Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Taekwondo donde se conoció la solicitud del Colegio de Árbitros para ser afiliado como miembro, por primera vez; 3) El acta de la reunión de la Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Taekwondo donde se aprobaron los requisitos para optar a la Certificación de Reconocimiento Nacional de Cinta Negra y KUKKIWON; que no se limite a un solo registro, sino a otros archivos que objetivamente pueden resguardar dicha documentación. Dichas diligencias deberán realizarse y dejar constancia por medio del presidente del FESAT, que de fe de las acciones de búsqueda realizadas. En el caso de no encontrarse la información en controversia, se deberá declarar su inexistencia, relacionando todos los medios probatorios y lo hechos que surjan en dicha diligencia.

d) Ordenar al Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y a la Federación Salvadoreña de Taekwondo que a través del oficial de información del INDES, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación de esta resolución, proporcione a [REDACTED] la información consistente en: 1) El acta de la reunión de la Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Taekwondo donde se conoció la solicitud del Colegio de Cintas Negras para ser afiliado como miembro, por primera vez; 2) El acta de la reunión de la Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Taekwondo donde se conoció la solicitud del Colegio de Árbitros para ser afiliado como miembro, por primera vez; 3) El acta de la reunión de la Junta Directiva de la Federación

Salvadoreña de Taekwondo donde se aprobaron los requisitos para optar a la Certificación de Reconocimiento Nacional de Cinta Negra y KUKKIWON; y, 7) El libro de registro de miembros de la Federación Salvadoreña de Taekwondo actualizado a fecha 9 de julio de 2018, o en su defecto el acta de inexistencia, detallando las acciones efectuadas para su búsqueda.

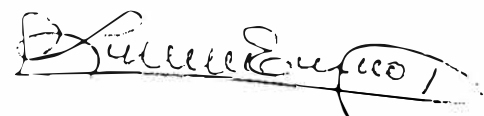
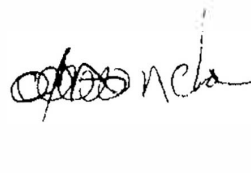
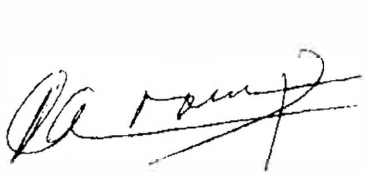
e) **Ordenar al Instituto Nacional de los Deportes (INDES)** que dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de la obligación contenida en las letras “c) y d)” de esta parte resolutive, el cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada al apelante, así como su recepción; bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

f) **Remitir** el presente expediente a la **Unidad de Cumplimiento** de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

g) **Hace saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo de conformidad con el Art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, si así se considerase necesario.

h) **Publicar** esta resolución oportunamente.

Notifíquese.-



PRONUNCIADO POR LAS COMISIONADAS Y COMSIONADOS QUE LA SUSCRIBEN

JV/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los doce días del mes de febrero de dos mil veinte.



NOTIFICADOR
IAIP

